

HAGO SABER: que en el procedimiento administrativo de apelación NUE 274-A-2019 (AC), el Instituto de Acceso a la Información Pública, con fecha 21 de octubre de 2020, ha pronunciado la resolución que literalmente

DICE: ~~~~~



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de octubre de dos mil veinte.

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por la ciudadana **Sonia Beatriz Hernández Chacón**, en adelante “la apelante”, contra la resolución de referencia UAIP_RES_0311_2_2019, emitida y notificada el 22 de octubre de 2019, por el Oficial de Información del Ministerio de Hacienda (en adelante “MH”), mediante la cual se denegó el acceso a la información consistente en:

“Proyecto de presupuesto 2020 en formato de base de datos hasta nivel específico. Se solicita que la información sea proporcionada en formato procesable (Excel)”. En particular no se entregó la información requerida en cuanto al detalle presupuestario del OIE, consignado en el proyecto del presupuesto para el 2020, en formato de base de datos hasta nivel objeto específico.

En ese orden, el Oficial de Información del MH ordenó la entrega de información excepto la información relacionada con el detalle presupuestario aplicable al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), por ser competencia de la Presidencia de la República, en virtud de la reserva establecida en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo.

Al respecto, la apelante manifestó su inconformidad, en tanto considera que no se han justificado debidamente las razones de hecho y derecho para denegar la información. Que el MH ha realizado una interpretación errónea del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, pues a dicha institución que le corresponde la elaboración del presupuesto del Estado, por lo cual es el

competente para brindar la información solicitada y que la actitud mostrada por el ente obligado tiende al ocultamiento de información, obstaculizando la labor de contraloría social.

El Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado José Alirio Cornejo para instruir el procedimiento, sin embargo, ha sido la Comisionada Suplente Cesia Yosabeth Mena Reina quien estuvo presente en la realización de audiencia oral, por tanto oportunamente brindó la instrucción de este caso. Asimismo, se requirió al ente obligado la presentación de su informe de defensa, según lo establecido en el Art. 88 de la LAIP.

Al tenor de lo anterior, se tuvo por recibido dicho informe en el cual se estableció por —el entonces Titular del MH— que una de las limitantes para la entrega de la información presupuestaria del Organismo de Inteligencia del Estado, consignado en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2020, era la declaración de reserva emitida por la Presidencia de la República con referencia 001-SP-2018, la cual tuvo una modificación el día 30 de mayo de 2019 y que se relaciona con los gastos reservados.

Asimismo, en el informe se expone que otra limitante con la que se cuenta como Ministerio de Hacienda, es lo establecido en los arts. 8 y 9 de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado (Ley de la OIE), que señalan: *“Todos los asuntos, actividades, documentación sobre los cuales conozca el Organismo de Inteligencia del Estado, serán considerados clasificados, cuyo manejo corresponderá al Presidente de la República”* y *“Todos los asuntos operativos, administrativos, del personal, organización y funcionamientos, serán regulados mediante el reglamento que para tal efecto emitirá el Presidente de la República”* -respectivamente.

con relación a lo anterior, continuó argumentando que el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo en su inciso segundo del art. 75 “B”, señala que son clasificados y secretos de Estado, todos los asuntos, actividades y documentación sobre los cuales conozca y produzca el Organismo de Inteligencia del Estado y su divulgación por cualquier persona constituirá delito de revelación de secretos de Estado, tipificado en el art. 355 del Código Penal.

Asimismo, se afirmó que al ser el OIE una dependencia de la Presidencia de la República, el MH se ha visto inhibido de proporcionar la información en específico de dicho organismo, alegando que es la Presidencia de la República la entidad competente para determinar el alcance de la Reserva y establecer la información presupuestaria del OIE consignado en el proyecto de presupuesto para el 2020, hasta el nivel de detalle requerido por la parte apelante.

Finalmente, el MH alegó incidente de prejudicialidad, por considerar que este caso se encontraba íntimamente relacionada con el proceso de apelación NUE 114-A-2019, de cuya

resolución final la Presidencia de la República ha puesto aviso de demanda, presentado el 23 de diciembre de 2019, ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo bajo la referencia NUE 00296- 19- ST -COAD-CAM”, pero tal pretensión oportunamente se resolvió, declarando no ha lugar la misma, al no configurarse los elementos procesales de una excepción de prejudicialidad.

Que al término de la etapa de instrucción, se realizó la audiencia oral en la fecha y hora señalada, con la comparecencia de la apelante **Hernández Chacón** y las apoderadas del ente obligado. En dicha actuación, las partes no alegaron la existencia de algún incidente que impidiera la realización de la audiencia y tampoco se realizó aportación probatoria por ninguna de las partes.

En la etapa de alegatos, la apelante expuso en lo medular que ratifica su inconformidad, pues no está de acuerdo con los argumentos vertidos por el MH. Que incluso son temas superados por la Sala de lo Constitucional y por el IAIP en cuanto al derecho de acceso a la información pública resueltos en casos similares. Asimismo, ratificó su solicitud de información en cuanto al detalle de la partida presupuestaria correspondiente al OIE para el año 2020, el cual incluye entrega de cuatro o cinco dígitos, similares a los ya entregados respecto a otras Carteras de Estado. Que no solicita conocer cuestiones de planes militares sino solo presupuesto en detalle específico. Que su petición en concreto es que este Instituto determine si lo solicitado debe ser o no entregado.

Por su parte, las apoderadas del ente obligado alegaron en lo medular, que al momento de presentar el informe de defensa, estaba vigente la medida cautelar dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, otra de las limitantes es la reforma hecha del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en el sentido que son clasificados como reservados, todo lo relacionado al presupuesto del OIE. En su petición en concreto, se afirmó que reitera la imposibilidad de entrega por la reserva emitida por la Presidencia de la República y lo establecido en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo.

Finalmente, a preguntas realizadas por el Pleno de Comisionadas y Comisionados de este Instituto, las apoderadas del MH, afirmaron que conocen la modificación de las medidas cautelares emitidas por la Cámara de lo Contencioso Administrativo, pero desconocen si Presidencia presentó demanda en esta fecha [2 de julio de 2020] ante dicha instancia jurisdiccional. Pero que sin duda la suspensión de plazos procesales afectó cualquier acción que podría realizar la Presidencia en “defensa de dicha reserva”. Aclara, que oportunamente se solicitó a este Instituto, con base al art. 70 de la LPA, que se pudiera hacer del conocimiento de la Presidencia de la República sobre este procedimiento, al ser sobre información generada por dicho ente obligado.

La parte apelante, aclaró que el presupuesto a nivel específico se refiere “a las cuentas presupuestarias que tienen cada institución del Estado, que tienen diferentes tipos de cuentas, por ejemplo salarios, gastos administrativos, etc., pero se diferencia por sus dígitos, por ejemplo de uno a cinco dígitos. Que la partida 54315 son 5 dígitos, esto es un objeto específico. Que pide información de gasto en ese objeto especificó, porque a veces entrega numeraciones hasta de tres dígitos, pero no los gastos que reflejan un mayor gasto de la institución del estado, que solicita información de gasto en ese objeto específico”.

2. Análisis del caso

El asunto medular consiste en determinar si la negativa de entregar la información requerida ha sido debidamente fundamentada, así como establecer la obligación de entregarla o no. Para tal efecto, conviene realizar un breve análisis respecto de: **(I)** Los efectos del principio de máxima publicidad y sus limitantes; **(II)** análisis del caso entorno a los argumentos vertidos por el ente obligado; y, **(III)** determinación de la naturaleza de la información y la posible obligación de entregarla.

I. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII- O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”².

El Art. 4 letra “a” de la LAIP establece que el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. En ese orden

¹ Corte I.D.H., *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

² CJI/RES. 147 (LXXIII- O/08), *Principios sobre el derecho de acceso a la información*, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI- RES_147_LXXIII- O- 08.p

de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los tres efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁷.

En relación a las limitaciones al DAIP se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, en la que se efectuó una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información: Que “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad”, que **“las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información”**, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”⁸.

Uno de los límites a este derecho es la **información reservada**, la cual se define como aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con la

³ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Idem

⁷ Idem

⁸ Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp

LAIP—específicamente en el Art. 19 de la LAIP—, en razón de un interés general durante un periodo determinado y por causas justificadas —Art. 6 letra “e” de la LAIP—.

El titular del ente obligado es el encargado de clasificar la información tomando en cuenta la legalidad, temporalidad y razonabilidad del porqué se decide excluir temporalmente la información; una vez ha concluido el plazo de reserva, la información vuelve a ser pública y por lo tanto puede ser solicitada por cualquier persona en virtud del DAIP. Es importante señalar que **las causales establecidas en el Art. 19 de la LAIP son taxativas** y no pueden invocarse otras que no estén señaladas en la ley.

Por otra parte, se tiene la **información confidencial** que es aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido, por lo cual, no se puede disponerse de su contenido por la vía del derecho de acceso a la información pública, tomando en cuenta lo establecido en el art. 24 de la LAIP.

II. En ese sentido, corresponde al ente obligado demostrar de manera fehaciente la aplicación de cualquiera de las causas de restricción al derecho de acceso a la información y el inminente daño que provocaría revelar la información que se trata de restringir por existir riesgos reales sobre el o los bienes jurídicos que se pretende proteger de conformidad a lo establecido en la LAIP. En ese contexto, la negativa de entregar información administrada o que tiene en su poder el MH en relación al detalle presupuestario del OIE, consignado en el proyecto del presupuesto para el 2020, en formato de base de datos hasta nivel objeto específico, será válida si se fundamenta en las excepciones establecidas en la LAIP.

Entonces, para el caso en comento, el ente obligado denegó la información alegando tres puntos en particular: (a) Por incompetencia, argumentando que la información ha sido generada por la Presidencia de la República y por tanto le corresponde a ella entregar la misma. (b) Por la Prejudicialidad —no obstante no conocer si se ha presentado demanda por parte de la Presidencia de la República dentro del caso con referencia NUE 114-A-2019, constando únicamente el aviso de demanda, presentado el 23 de diciembre de 2019, ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo bajo la referencia NUE 00296-19-ST-COAD-CAM—; y, (c) Por lo ordenado en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, respecto a lo establecido en el art. 75 “b” en cuanto a que son “clasificados y secretos de Estado, todos los asuntos, actividades y documentación sobre los cuales conozca y produzca el Organismo de Inteligencia del Estado, incluidos los aspectos administrativos, presupuestarios del personal, organización y funcionamiento del mismo, y su

divulgación por cualquier persona constituirá delito de revelación de secretos de Estado, tipificado en el art. 355 del Código Penal.”

En tal sentido, consideramos importante, determinar *prima facie* en qué consiste la información requerida por la ciudadana apelante, a efecto de conocer la naturaleza de la misma, quedando establecida su relación directa con la elaboración del Presupuesto General de la Nación, en particular el entregado para el año 2020.

Es así, que según el Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público⁹, indica que: *La clasificación por Tipo de Gasto, **permitirá identificar el destino del gasto de acuerdo con los bienes y servicios a producir y prestar, respectivamente, con el propósito de identificar si éstos tienen por finalidad apoyar el funcionamiento de las dependencias del sector público, la creación de inversión pública a través de la ejecución de proyectos y obras de interés público; así como identificar las transacciones del servicio y pago de la deuda pública. Es por ello que se han definido cuatro grandes Categorías de Tipo de Gasto que son: Gasto de Funcionamiento, Gasto de Inversión, Deuda Pública y Gasto en Contribuciones Especiales.*** (itálica y negritas suplidas)

Es decir, que la clasificación que solicita la ciudadana apelante permite determinar a qué rubro se ha destinado parte del presupuesto asignado —en particular— al Organismo de Inteligencia del Estado.

Ahora bien, a nivel específico se refiere a que¹⁰: “En el Clasificador Presupuestario se establece una estructura lógica y homogénea entre los clasificadores de ingresos y gastos, aplicando un criterio uniforme de origen y destino. Dicha estructura está constituida por: [...] 3. Objetos Específicos: **Se generan adicionando dos códigos a la cuenta. Ejemplo: 11101 De Personas Naturales Asalariadas. Los específicos correspondientes a las Transferencias de Aporte Fiscal y al Sector Público se constituirán por siete dígitos**, asociando el código de la cuenta al código de la institución definido en el Clasificador Institucional por Áreas de Gestión para fines Presupuestarios.

⁹ Retomado el 16 de septiembre de 2020, de:

https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/DC6038_Manual_de_Clasificacion_para_las_Transacciones_Financieras_del_Sector_Publico_Abril_2017.pdf

¹⁰ Recuperado el 16 de septiembre de 2020, de:

file:///C:/Users/Equipo%2012/Downloads/Manual_de_Clasificacion_para_las_Transacciones_Financieras_del_Sector_Publico-26-06-13.pdf

Debe entenderse entonces que lo requerido en el presente procedimiento consiste en la determinación de los dígitos de aquellos rubros a los que estarían destinado el presupuesto de gasto del OIE, como por ejemplo salarios, bienes y servicios, etc., sin establecer el monto destinado para tal fin, es decir, solo la descripción de su destino presupuestario.

Bajo este contexto se procede hacer el análisis de cada uno de los argumentos, presentados por el ente obligado, valorando el contenido del expediente administrativo:

(a) Respecto a la incompetencia argumentada por el MH, debe hacerse una lectura literal del art. 6 c) de la LAIP, que afirma que “*es información pública aquella en poder de los entes obligados. [...] La cual pudo haber sido generada, **obtenida**, transformada o conservada por éstos a cualquier título*”. En otras palabras, la obligación de entrega o la competencia para su tramitación, no deviene exclusivamente del ente que generó la información, sino más bien de quien la ostenta.

Bajo este criterio y siendo tan específica la ley respecto al derecho de las personas a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas (art. 2 de la LAIP), no es atinente el criterio de incompetencia alegado por el MH, aunado a que existe una obligación legal de dicha institución de elaborar “...los anteproyectos de Presupuesto General del Estado y Especiales, así como informes trimestrales de evaluación de la ejecución de los mismos, para ser considerados por el Consejo de Ministros...”(art. 7 literal j) de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado —en adelante LOAFI—), por lo cual ostenta la carga probatoria para establecer una negativa en la entrega de información que por ley le corresponde recolectar, como lo es lo relacionado al Presupuesto General del Estado.

En esta misma línea resolutive, este Instituto en resolución definitiva emitida el nueve de marzo de 2015, dentro del procedimiento de apelación con referencia NUE 194-A-2014 (MV), estableció que: “Según el Art. 86 de la Constitución de la República los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley, por lo tanto, **para que [exista] la obligación de dar trámite a una solicitud de información es necesario que tenga competencia para ello** o que, cuando menos, exista algún vínculo jerárquico entre un ente y otro.”; siendo el caso de análisis la existencia de atribución legal para el MH dentro de la elaboración, seguimiento y ejecución del Presupuesto General del Estado, no es pertinente dar lugar a la excepción de incompetencia argumentada por el ente obligado.

Un elemento de suma importancia en este análisis, es la entrega del resto de información requerida por la apelante, sobre el “Proyecto de presupuesto 2020 en formato de base de datos hasta

nivel específico...”, es decir el MH si accedió a entregar la información relacionada a otras carteras de Estado sin alegar excepción de incompetencia, por tanto, de forma explícita reconoce su obligación legal de entregar información pública que obra en su poder, no importando que no ha sido generada por ella, debiendo el ente obligado ser coherente con dicho actuar.

(b) El segundo punto alegado en este procedimiento es la existencia de prejudicialidad, por el aviso de demanda interpuesto por la Presidencia de la República dentro del expediente con referencia NUE 114-A-2019, presentado el 23 de diciembre de 2019, ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo bajo la referencia NUE 00296-19-ST-COAD-CAM, señalando que uno de los puntos en litigio, versa sobre la reserva de la información presupuestaria asignada al Organismo de Inteligencia de Estado, por lo cual afirmaba la existencia de una conexión directa que pende de la resolución administrativa que emita la Cámara de lo Contencioso Administrativo sobre este particular.

Sin embargo, como ya se afirmó por este instituto, en auto de fecha 23 de junio de este año, un requisito *sine qua non* de la prejudicialidad se requiere la existencia de un proceso debidamente configurado respecto del mismo objeto de litigio o que tiene conexión directa con el de otro proceso. Que de manera particular, dentro del proceso contencioso administrativo, el art. 104 señala que admitido a trámite cualquiera de los recursos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (LJCA) “se suspenderá la ejecución de la resolución recurrida”. Esto, nos permite analizar, incluso a la fecha de esta resolución definitiva, que no existen elementos mínimos de tal prejudicialidad, pues por una parte ya no existe medida cautelar de no entrega referente al “detalle desagregado del presupuesto asignado al organismo durante el ejercicio fiscal 2018, indicando —al menos— el monto que está destinado al pago de remuneraciones, de bienes y servicios”, en el cual si se otorga la entrega de montos y sus correspondientes rubros.

Otro aspecto importante, es que tampoco se ha notificado a este instituto la presentación formal de una demanda en ese caso, habiendo transcurrido el plazo establecido en el art. 25 de la LJCA, por ende no se puede resolver una prejudicialidad bajo la configuración de supuestos, sino más bien le correspondía al MH hacer el ofrecimiento probatorio tendiente a establecer los extremos de sus pretensiones, sobretodo porque con ello se limita el derecho de acceso a la información pública de la apelante.

(c) El último punto en discusión es el contenido del art. 75 “b” del RIOE, en cuanto a que: son “*clasificados y secretos de Estado, todos los asuntos, actividades y documentación sobre los cuales conozca y produzca el Organismo de Inteligencia del Estado, incluidos los aspectos administrativos, presupuestarios del personal, organización y funcionamiento del mismo, y su*

divulgación por cualquier persona constituirá delito de revelación de secretos de Estado, tipificado en el art. 355 del Código Penal.”

Para lo cual se debe poner en práctica un principio básico de interpretación jurídica, en el sentido de promover la integración de la normativa, en otras palabras, el análisis de dicha norma reglamentaria, debe realizarse a todas luces conforme al espíritu de la Constitución de la República y leyes secundarias, en particular de la LAIP.

En este sentido, para que se encuentre dotado de legitimidad el contenido del art. 75 “b” del RIOE, debe existir una reserva conforme a lo estipulado en la LAIP, y tal análisis se realizó oportunamente en el expediente NUE 114-A-2019 y aunque no se probó nada al respecto por el MH, es pertinente traer a colación lo ordenado en la resolución definitiva de tal procedimiento de apelación, en virtud del principio de verdad material, en el que se estableció que:

*“...este Instituto estima que el acto administrativo declarativo de reserva que data del año 2015 –objeto del presente procedimiento– es genérico, pues según los motivos plasmados en dicho documento, el ente declara la reserva de **“toda la documentación relacionada a la OIE y que ingrese a dicho expediente administrativo”**, lo cual a la vez la convierte en una reserva absoluta. Si bien los entes obligados están facultados para reservar información, la cual se fundamenta por el daño que representaría la difusión de esta; la reserva declarada no puede hacerse de forma genérica, ya que eso violentaría el Principio de Máxima Publicidad y el DAIP en sí mismo.*

El exigir que la reserva sea expresa tiene relación con el principio de seguridad jurídica y de legalidad de los artículos 2 y 86 de la Constitución, así como el principio de máxima publicidad del art. 4 literal a) de la LAIP, en el sentido que los ciudadanos sepan de antemano cuál información pública no se encuentra a disposición y el tiempo en el cual permanecerá restringida, debiendo los entes obligados detallar de forma clara y precisa el tipo de información que no se divulgará. El consignar en la declaratoria de reserva información genérica, vulneraría el derecho a la información pública de los ciudadanos, pues permitiría a las instituciones un amplio margen de actuación para restringir arbitrariamente los documentos que pueden ser de conocimiento público.”

De esta línea resolutive se retoma para este caso dos puntos importantes, y es que en este caso el oficial de información, dentro de sus funciones de garantizar el acceso a la

información pública, debió verificar la existencia o no de una reserva, el estado de la misma y las consecuencias para este caso; empero, al revisar el expediente administrativo no se logra identificar una gestión por parte del oficial de información del MH, encaminada a este punto, manteniendo una postura reacia a la entrega de información relacionada al Organismo de Inteligencia del Estado, minimizando la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, no obstante el rango superior en el que se encuentra frente al contenido del RIOE .

Asimismo, es importante retomar la naturaleza pública de las funciones que se realizan por el OIE y que por regla general, está sometida a la contraloría social. En este mismo sentido Ley del Organismo de Inteligencia del Estado, en su artículo 3 reconoce que : “El Organismo de Inteligencia del Estado es un ente de carácter civil, profesional y apolítico **al servicio de la sociedad** y el Estado” (negritas propias).

Sobre las atribuciones legales encomendadas al OIE, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido que: “...es pertinente señalar que la inteligencia del Estado es un campo sumamente amplio, las funciones que tradicionalmente se le asignan se enfocan en la inteligencia estratégica para la adecuada toma de decisiones políticas en ámbitos como la seguridad, la defensa y la integridad del territorio, de modo que sus campos de acción son tanto internos –inteligencia– como externo –contrainteligencia–. **Su objetivo es defender los intereses del Estado frente a las amenazas que pongan en riesgo la paz, la seguridad y los derechos fundamentales**”¹¹.(negritas propias)

Entendiéndose por este Instituto que las labores de inteligencia ejecutadas por el OIE, están enfocadas en la recolección, evaluación y análisis de información útil, que tiene por objeto informar y asesorar al Presidente de la República en lo necesario para la satisfacción de los objetivos nacionales vinculados al desarrollo del país, la seguridad del Estado y la vigencia del régimen democrático, referida especialmente a todos los campos de la seguridad nacional (Art. 3 de la LOIE), ya que con la información obtenida buscan proteger el bien jurídico de la seguridad nacional.

Esto no significa, que el Organismo de Inteligencia de Estado, sea una área exenta de control y menos que se encuentre eximida de la obligación de rendir cuentas, ya estando establecido en la ley la forma bajo la cual se debe resguardar la información sensible,

¹¹ Sentencia de Amparo 636-2014AC, Emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas con cuarenta y un minutos del día veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.

relacionada con la seguridad nacional, seguridad pública y otros bienes jurídicos protegidos, por medio de la resolución de reserva correspondiente, ello de conformidad al principio de máxima publicidad de conformidad con el Art. 5 de la LAIP, sin que en esta caso el MH haya probado ningún elemento que conlleve a establecer que existe un riesgo en la información solicitada en este procedimiento

III. Con el análisis realizado en el presente caso, se puede tener por establecido que la información solicitada, consistente en: proyecto de presupuesto 2020 en formato de base de datos hasta nivel específico, en particular el detalle presupuestario del OIE, constituye en información pública, al ser información que se encuentra en poder del MH dentro del ejercicio de sus funciones. Asimismo, se ha logrado advertir que no se ha realizado un análisis del contenido del art. 75 “b” del RIOE conforme a la LAIP, no pudiendo acogerse a esta normativa toda la información relacionada al ejercicio de las funciones que ejerce el OIE.

En este sentido, al haberse establecido que la información solicitada constituye sólo en la determinación de los rubros que se ejecutará según el proyecto de presupuesto otorgado para el año 2020 a favor del OIE, es pertinente ordenar la entrega de la información según lo solicitado por la ciudadana **Sonia Beatriz Hernández Chacón**.

3. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 6 y 18 de la Cn., 52 inciso 3º, 58 letras “b” y “d”, 94, 96 letra “d”, y 102 de la LAIP, este Instituto, **resuelve:**

a) Modificar la resolución con referencia UAIP_RES_0311_2_2019, emitida y notificada el día 22 de octubre de 2019 por el oficial de información del **Ministerio de Hacienda (MH)**.

b) Ordenar al Ministerio de Hacienda que, a través de su titular, en el plazo de **diez días hábiles**, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, entregue por medio de su oficial de información a la ciudadana **Sonia Beatriz Hernández Chacón**, la información consistente en: el proyecto de presupuesto 2020 en formato de base de datos hasta nivel específico, en particular el detalle presupuestario del OIE.

c) Requerir al Ministerio de Hacienda que en el plazo de **veinticuatro horas**, luego de fenecidos los plazos estipulados en las letras b) de esta parte resolutive, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido vía electrónica a la dirección **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

